



Un megavatio no pesa lo mismo según quién lo cargue. En España, desde hace años, lo cargan las casas. En la imagen, torres de alta tensión en Madrid

Santiago Rodríguez

Conviene tener una cifra a mano cada vez que alguien sostiene que la electricidad en España ha dejado de ser un problema: 29,75 céntimos por kilovatio hora. Es lo que pagó un hogar español medio en el segundo semestre de 2025 con todos los impuestos y cargos incluidos, según Eurostat. Nos sitúa en la décima posición más cara de la Unión Europea, por encima de la media comunitaria. Hace apenas dos años, estábamos por debajo de ella. Semestre tras semestre, hemos ido escalando puestos en un ranking en el que nadie quiere estar. Lo llamativo no es el número, sino su compañía. En ese mismo semestre, en ese mismo país y sobre ese mismo sistema eléctrico, la industria española figura entre las más competitivas del continente. CaixaBank Research lo ha medido: si en 2018 la industria española pagaba un 31,5% más por su electricidad que la europea, en 2024 pagaba un 20,9% menos. Un vuelco de más de cincuenta puntos en seis años. España es, pues, un país caro para vivir y barato para producir. No es un accidente estadístico. Es el sedimento de decisiones deliberadas tomadas a lo largo de dos décadas, y su factura la paga alguien concreto.

Lo que hay dentro del recibo
Abramos una factura doméstica cualquiera. De cada cien euros, apenas veintiocho corresponden a la electricidad realmente consumida. Treinta y seis se van en peajes de transporte y distribución. Veintiuno son impuestos. Diez son cargos: la partida donde el sistema ha ido depositando durante años las primas a las renovables antiguas, la anualidad del déficit de tarifa, el sobrecoste extra-

peninsular. Los tres restantes, el alquiler del contador. Léase despacio: menos de un tercio de lo que paga un hogar español es energía. El resto es red, política pública acumulada e impuestos. Cuando el titular anuncia que el mercado mayorista ha caído –y en 2025 cayó un 18,5% en el segundo semestre respecto al año anterior–, esa buena noticia solo puede actuar sobre una cuarta parte del recibo. Las otras tres cuartas partes son inelásticas por construcción. La parte fiscal merece capítulo propio. Desde el 1 de enero de 2025 la electricidad tributa al IVA general del 21%, el mismo tipo que un perfume o un televisor, aplicado sobre el total: energía, potencia, peajes, cargos, contador y también sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad, restituido ese mismo año al 5,113%. Pagamos, literalmente, impuesto sobre el impuesto.

El termostato fiscal
Y esa fiscalidad no es estable, sino oscilante. En marzo de 2026, con el Brent por encima de 119 dólares tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, el Real Decreto-ley 7/2026 bajó el IVA eléctrico al 10% y el impuesto especial al 0,5%. El 1 de junio, moderado el IPC eléctrico, ambos volvieron a su tipo pleno. La

norma incorpora además una cláusula de reactivación automática para agosto y septiembre si la inflación eléctrica de junio o julio repunta más de un quince por ciento interanual. Es decir: mientras usted lee esto, no se sabe con certeza qué IVA pagará en su factura de agosto. Hemos convertido la fiscalidad energética en un termostato de emergencia. Se sube cuando el precio baja, se baja cuando el precio sube, y el hogar nunca llega a saber cuánto cuesta realmente su megavatio. Un sistema que necesita cuarenta mil millones de euros de inversión en redes hasta 2030 no puede financiarse con un tributo que se enciende y se apaga según el titular del mes.

A 30 céntimos el kWh, la bomba de calor no desplaza a la caldera

Eurostat no significa que toda la industria lo esté: los grandes electrointensivos, según el barómetro de AEGE, siguen pagando 2,5 veces más que en Francia y un 34% más que en Alemania. La ventaja es real, pero es media, y las medias esconden a los extremos.

Llegados aquí, alguien hará la división obvia. Si un hogar español gasta unos 900

euros al año en electricidad sobre una renta neta media de 38.994 euros, eso es el 2,3% de sus ingresos. Un hogar del área de PJM, el mayor mercado eléctrico de Estados Unidos, dedica en torno al 3%.

La objeción y la respuesta
Luego no pagamos tanto. La objeción es correcta y conviene aceptarla, porque la respuesta incomoda más que la queja. Por ese 2,3%, el hogar español compra unos 3.000 kilovatios hora al año. Por su 3%, el americano compra once mil. Por cada punto de renta dedicado a la luz, aquí se obtiene menos de la mitad de energía. Eso no es sobriedad ni eficiencia. Es un país donde electrificar la vivienda nunca termina de salir a cuenta.

A treinta céntimos el kilovatio hora, la bomba de calor no desplaza a la caldera de gas, la inducción no desplaza al butano y el coche eléctrico pierde buena parte de su ventaja frente al diésel.

El precio unitario no es un problema de recibo a fin de mes: es un peaje de entrada a la electrificación. Y lo estamos cobrando justo en el momento en que toda nuestra política energética consiste en pedirle al ciudadano que se electrifique. La paradoja se ve mejor desde Extremadura. Una tierra que exporta electricidad, que concentra nuclear y algunos de los mayores parques solares del continente, y cuyos hogares pagan exactamente el mismo kilovatio hora caro que el resto. Producimos energía barata y se la vendemos cara a quien vive al lado de la planta. Un megavatio no pesa lo mismo según quién lo cargue. En España, desde hace años, lo cargan las casas.

Santiago Rodríguez es empresario, filántropo y estudioso tecnológico especialista en energía